

MEMORIA EJECUTIVA DEL ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO DE LA LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 9/1999, DE 29 DE ABRIL, DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

Se emite la presente memoria en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la Comunidad de Madrid, siendo de aplicación su artículo 6 por tratarse este proyecto de un texto de carácter normativo del que no se derivan impactos económicos, presupuestarios, sociales, sobre las cargas administrativas ni cualquier otro análogo, apreciables.

I. FICHA RESUMEN EJECUTIVO

Consejería / Órgano directivo proponente	Consejería de Economía, Hacienda y Empleo	Fecha inicial	Diciembre de 2021
Título de la norma	Ley por la que se modifica la Ley 9/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid-		
Tipo de Memoria	<input type="checkbox"/> Extendida <input checked="" type="checkbox"/> Ejecutiva		
OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA			
Situación que se regula	Se modifica la composición del Consejo de la Cámara, la elección del presidente y el procedimiento de elección de los Consejeros, así como la forma de designación de los funcionarios titulares de los puestos de trabajo de Jefe de Unidad Fiscalizadora.		
Objetivos que se persiguen	El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 11/1999, de 29 de abril, y la experiencia acumulada desde entonces, aconsejan modificar algunos aspectos de la Ley para conseguir mejoras en su funcionamiento y eficacia que redunden en un cumplimiento más adecuado de las funciones que tiene encomendadas.		
Principales alternativas consideradas	Ninguna. Se modifica una Ley ya existente por lo que su modificación debe ser por Ley.		



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1055226118700062994383**

CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO	
Tipo de norma	Ley de la Asamblea.
Estructura de la Norma	El anteproyecto de ley se estructura en un único artículo en el que se modifican 4 artículos de la Ley 11/1999, de 29 de abril, y se incluye una disposición adicional
Informes recabados	<p>Informe de Calidad Normativa</p> <p>Informes de la Dirección General de Igualdad, sobre el impacto de género y por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.</p> <p>Informe de la Dirección General de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad.</p> <p>Informe de la Dirección General de Presupuestos.</p> <p>Informe de la Dirección General de Recursos Humanos.</p> <p>Informe de la Dirección General de Función Pública.</p> <p>Informe de observaciones de las secretarías generales técnicas</p>
Trámite de Consulta Pública	No se ha sometido a este trámite al tratarse de una norma que carece de impacto significativo en la actividad económica y regula aspectos parciales de la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general de la Comunidad de Madrid.
Trámite de audiencia	Se someterá a trámite de audiencia e información públicas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.
ANÁLISIS DE IMPACTOS	
ADECUACIÓN AL ORDEN DE COMPETENCIAS	El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 44 que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la



	Constitución. Se indica además que por Ley de la Asamblea se regularán la composición y funciones de la Cámara de Cuentas.	
IMPACTO ECONÓMICO Y PRESUPUESTARIO	Efectos sobre la economía en general	Del contenido del proyecto no se deriva incidencia directa sobre la economía en general
	En relación con la competencia	<input checked="" type="checkbox"/> La norma no tiene efectos significativos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos positivos sobre la competencia. <input type="checkbox"/> La norma tiene efectos negativos sobre la competencia.
	Desde el punto de vista de las cargas administrativas	<input type="checkbox"/> Supone una reducción de cargas administrativas. Cuantificación estimada: <input type="checkbox"/> Incorpora nuevas cargas administrativas. Cuantificación estimada: <input checked="" type="checkbox"/> No afecta a las cargas administrativas.
	Desde el punto de vista de los presupuestos, la norma <input checked="" type="checkbox"/> Afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid. <input type="checkbox"/> No afecta a los presupuestos de la Administración de la Comunidad de Madrid.	<input checked="" type="checkbox"/> Implica un gasto de 502.782,60 euros <input type="checkbox"/> Implica un ingreso.



IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO	La norma tiene un impacto de género	<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo
IMPACTO POR RAZÓN DE ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO		<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo
IMPACTO EN MATERIA DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA		<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo
OTROS IMPACTOS CONSIDERADOS	Impacto en la unidad de mercado	<input type="checkbox"/> Negativo <input checked="" type="checkbox"/> Neutro <input type="checkbox"/> Positivo
OTRAS CONSIDERACIONES	Ninguna	

II. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.

1. Fines y objetivos.

La Constitución española configura al Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público (artículo 136.7). Asimismo, la Constitución establece que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por el Tribunal de Cuentas respecto de su actividad económica y presupuestaria (artículo 153.d). El artículo 136 de la Constitución y el artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, establecen al amparo de la autonomía financiera reconocida a las Comunidades Autónomas para el desarrollo y ejecución de sus propias competencias, la posibilidad de que los Estatutos de Autonomía prevean la existencia para las Comunidades Autónomas de órganos propios de fiscalización externa de sus cuentas.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 44 que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución. Se indica además que por Ley de la Asamblea se regularán la composición y funciones de la Cámara de Cuentas.

En uso de tales competencias, la Ley 11/1999, de 29 de abril, reguló la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid.

El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 11/1999, de 29 de abril, y la experiencia acumulada desde entonces, aconsejan modificar algunos aspectos de la Ley para



conseguir mejoras en su funcionamiento y eficacia que redunden en un cumplimiento más adecuado de las funciones que tiene encomendadas.

Para ello se modifica la composición del Consejo de la Cámara, la elección del presidente y el procedimiento de elección de los Consejeros, así como la forma de designación de los funcionarios titulares de los puestos de trabajo de Jefe de Unidad Fiscalizadora.

2. Adecuación a los principios de buena regulación.

El proyecto normativo se adecúa, tanto en su tramitación como en su contenido, a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 2 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.

De acuerdo con los principios de necesidad y eficacia, la norma propuesta trata de mejorar el funcionamiento de la Cámara de Cuentas y conseguir un cumplimiento más adecuado de las funciones que tiene encomendadas.

Por otro lado, se cumple el principio de proporcionalidad, ya que se contiene la regulación imprescindible y necesaria para atender la necesidad a cubrir por la misma, limitándose a modificar determinados aspectos de la composición de los órganos y funcionamiento de la Cámara de Cuentas.

Se ha cumplido, igualmente, con el principio de seguridad jurídica, con la plasmación de la actuación en una norma que será objeto de publicación. Así mismo se dicta en coherencia con el resto del ordenamiento jurídico de la Comunidad de Madrid, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable y claro que facilita su conocimiento y comprensión.

En cuanto al principio de transparencia, está exenta de consulta pública, pero se someterá al trámite de audiencia e información públicas, y en su elaboración se ha contado con la consulta de las secretarías generales técnicas. Tras la publicación de la norma, esta quedará a disposición para su consulta en la base de legislación de la Comunidad de Madrid contenida en su Portal de Transparencia.

Finalmente, se adecúa al principio de eficiencia, ya que esta norma no conlleva cargas administrativas para los ciudadanos. Así mismo la regulación propuesta es la mínima indispensable para atender a su objetivo.

III. TÍTULO COMPETENCIAL.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 44 que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución. Se indica además que por Ley de la Asamblea se regularán la composición y funciones de la Cámara de Cuentas.

En uso de tales competencias, la Ley 11/1999, de 29 de abril, reguló la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que ahora se pretende modificar.



IV. CONTENIDO Y TRAMITACIÓN.

1. Contenido.

El anteproyecto de ley se estructura en un único artículo y una disposición adicional.

En el artículo único se modifican los siguientes artículos de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid:

En el artículo 24 se incrementa el número de Consejeros, que pasan de tres a siete. Se modifica el quorum de asistencia a las reuniones del Consejo.

En el artículo 26 se reduce de nueve a seis el número de años por los que es elegido el Presidente de la Cámara y se modifica el número de votos necesario para ser elegido.

En el artículo 32 se modifica la mayoría requerida por la Ley para la elección por la Asamblea de los Consejeros, y se reduce el número de años de su mandato que pasa de nueve a seis años.

En el artículo 38 se modifica el sistema de selección de los funcionarios titulares de los puestos de trabajo de Jefe de Unidad Fiscalizadora.

En la disposición adicional, se establece la renovación por la Asamblea de Madrid de los consejeros miembros de la Cámara de Cuentas, conforme a la nueva regulación prevista en la ley y en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la ley.

2. Descripción de la tramitación.

En la tramitación administrativa del anteproyecto de ley se han cumplido las disposiciones vigentes, especialmente las referentes a la elaboración de disposiciones de carácter general de conformidad con el Decreto 52/2021, de 24 de marzo:

- Informe de calidad normativa, de conformidad con el artículo 12 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo y el Decreto 191/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. Se toman en consideración todas sus observaciones formales y en la disposición adicional segunda, se incorpora un plazo de tres meses para que la Asamblea General proceda a la elección de los Consejeros y, por otro lado, se corrige un error en la cita legal a la Ley de modificación de la Ley 11/1999, de 29 de abril.

Redacción actual:

“Disposición adicional segunda. *Elección de los Consejeros de la Cámara de Cuentas.*

Tras la entrada en vigor de la presente ley, la Asamblea de Madrid elegirá a los Consejeros miembros de la Cámara de Cuentas, en el número, por el procedimiento y requisitos establecidos en el artículo 32 por el que modifica la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de cuentas de la Comunidad de Madrid”.

Nueva redacción:

Disposición adicional segunda. *Elección de los Consejeros de la Cámara de Cuentas.*



En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, la Asamblea de Madrid elegirá a los Consejeros miembros de la Cámara de Cuentas, en el número, por el procedimiento y requisitos establecidos en el artículo 32 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, en su redacción dada por el artículo treinta de la presente ley".

- Informe de la Dirección General de Presupuestos previsto en el Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública. No formula observaciones, si bien indica que el mayor gasto deberá ser asumido dentro de los límites presupuestarios que se aprueben para el ejercicio 2022, sin que pueda suponer un incremento del presupuesto global de la Comunidad de Madrid.
- Informe de la Dirección General de Recursos Humanos, de acuerdo con el Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública. En dicho informe, se formulan varias observaciones, que se toman en consideración:
 - ✓ Se adapta la cuantía del impacto presupuestario de la modificación, considerando el salario y las cuotas sociales de los consejeros.
 - ✓ Se incluye, en los términos anteriormente indicados, un plazo para la renovación de los miembros de la Cámara de Cuentas y se corrige el error detectado en la cita de la ley.
- Informe de la Dirección General de Función Pública, de acuerdo con el Decreto 272/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Hacienda y Función Pública. No formula observaciones.
- Informe de impacto de género de la Dirección General de Igualdad, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
- Informe de la Dirección General de Igualdad, de conformidad con lo establecido en el Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid.
- Informe de impacto en la infancia, la adolescencia y la familia de la Dirección General de Infancia, Familias y Fomento de la Natalidad, de acuerdo con la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas y en relación con el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996.
- Se someterá al trámite de audiencia e información públicas de acuerdo con el artículo 9 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.
- El anteproyecto normativo se ha circulado a las secretarías generales técnicas de las consejerías para informe de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo.



- Se solicitará el informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid conforme al artículo 4 de la Ley 3/1999, de 30 de marzo, de Ordenación de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

No se realizarán los siguientes trámites:

- En el presente caso, no procede la práctica del trámite de consulta pública al tratarse de una norma que carece de impacto significativo en la actividad económica y regula aspectos parciales de la materia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general de la Comunidad de Madrid.

3. La norma proyectada no figura en el Plan Normativo

El Decreto 52/2021, de 24 de marzo, establece en su artículo 3 que durante el primer año de cada legislatura se publicará en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid el Plan Normativo aprobado por el Consejo de Gobierno para dicho período.

Dicho Plan Normativo no se ha aprobado todavía para la XII Legislatura que acaba de comenzar.

V. ANÁLISIS DE IMPACTOS.

1. Impacto jurídico y administrativo.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, establece en su artículo 44 que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución. Se indica además que por Ley de la Asamblea se regularán la composición y funciones de la Cámara de Cuentas.

En uso de tales competencias, la Ley 11/1999, de 29 de abril, reguló la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, que ahora se pretende modificar.

2. Impacto económico y presupuestario

La aprobación del anteproyecto normativo no conlleva ningún tipo de impacto económico.

El anteproyecto normativo supondrá incrementar el número de Consejeros de tres a siete, es decir, se incrementan en cuatro.

De acuerdo con el artículo 32.4 de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, *“Los Consejeros tendrán las retribuciones previstas para los Consejeros de la Administración de la Comunidad de Madrid. Dichas retribuciones se recogerán expresamente en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.”*

Las retribuciones de los Consejeros de la Administración de la Comunidad de Madrid ascienden a 7.286,70 euros en concepto de salario y a 1.093,01 euros de acuerdo con la Ley 8/2000, de 20 de junio, por la que se procede a la homologación de las retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad de Madrid con los de la Administración General del Estado, y de los Diputados de la Asamblea de Madrid con los Diputados por Madrid del Congreso, es decir un total de 8.379,71 euros al mes. Teniendo en cuenta doce pagas, y las cuotas sociales



anuales que ascienden a 25.139,13 euros el importe sería de 125.695,65 euros en cómputo anual por Consejero, es decir, ascendería a un total de **502.782,60 euros**.

3.- Impacto por razón de género.

De conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se informa que, examinado el objeto y contenido del anteproyecto de ley, no es pertinente la dimensión de género en su aplicación sin que proceda por ello evaluar el impacto potencial del proyecto normativo en los hombres y en las mujeres, por considerar que de la misma no derivan políticas discriminatorias.

4.- Impacto en la infancia, adolescencia y familia.

De acuerdo con el artículo 22 quinquies de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Disposición Adicional Décima de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, se informa que carece de impacto en la infancia, adolescencia y familia.

5.- Impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

De conformidad con el artículo 21.2 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, esta disposición carece de impacto por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.

6.- Impacto sobre unidad de mercado en el territorio nacional.

El anteproyecto de ley carece impactos en la unidad de mercado ya que no regula de forma directa ni indirecta un sector económico o alguna actividad económica objeto de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, por lo tanto, no establece nuevas barreras u obstáculos o requisitos para el acceso o ejercicio de dichas actividades. Por esa misma razón, no afecta a la competencia o la competitividad de las empresas madrileñas. De ello se deduce, además, que no resulta procedente su remisión a la Plataforma regulada en el artículo 14 de esa Ley.

La norma proyectada carece de impactos específicos sobre las PYME.

V.- NORMAS DEROGADAS

En el anteproyecto normativo no se prevé la derogación de ninguna norma.

EL SECRETARIO GENERAL TÉCNICO

